

## CAPÍTULO II. EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES EN MÉXICO

Hacer un análisis de las políticas neoliberales en México posibilita la comprensión de su impacto en los contextos socioeconómico y educativo, en el que los resultados obtenidos permiten demostrar que el panorama que se vislumbran son altos niveles de pobreza, marginación y desigualdad en la población, así como las precariedades que existen en el sistema educativo, y en este contexto, de acuerdo con Salamón (1980), los grupos más vulnerables de las sociedades capitalistas (como es el caso de México) apropián, mediante códigos simbólicos, expresiones culturales poco desarrolladas, como lo es la narcocultura, formando expectativas de vida que les permiten huir de la pobreza y tener ingresos económicos “accesibles, fáciles, rápidos y seguros”, es por ello que considero imprescindible que para la comprensión del fenómeno a estudiar, es fundamental entender el desarrollo e impacto del neoliberalismo.

Actualmente, existe un proceso económico mundial conocido como *globalización*, la cual se entiende como una dinámica de integración de las economías locales en los mercados mundiales por medio del libre comercio. De acuerdo con González Gaudino (2000), esta práctica ha permitido un rápido y alto crecimiento económico en las últimas décadas como nunca antes se había visto en la historia. Sin embargo, este desarrollo solo ha logrado el beneficio de las grandes empresas transnacionales a costa de la explotación laboral. Este problema se agudiza más en los países subdesarrollados como los de Latinoamérica, que sufren de un bajo desarrollo social, económico y cultural, así como un estado de violencia que se manifiesta a través del tráfico de drogas y de armas, la pobreza, la corrupción, entre otros. En este contexto, las políticas neoliberales juegan un papel determinante en las lógicas de la globalización. Para poder comprender la complejidad del fenómeno, este capítulo tiene como objetivo, hacer un análisis sobre la concepción teórica, los procesos históricos y el impacto socioeconómico de las políticas neoliberales en México.

## 2.1 EL NEOLIBERALISMO EN AMÉRICA LATINA. ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Como primer punto, es importante definir qué son y en qué consisten las teorías y prácticas político-económicas del neoliberalismo. De acuerdo con la propia teoría, esta busca promover el bienestar humano y, para alcanzarlo, no se tiene que limitar el desarrollo de las capacidades y libertades empresariales de las personas que se logran por medio de los derechos de propiedad privada, los mercados libres y la libertad de comercio. Las empresas privadas y la iniciativa empresarial son consideradas la creación de la riqueza, por lo que los derechos de propiedad intelectual, son protegidos por medio de patentes que permiten crear y optimizar tecnologías, con el fin de mejorar los niveles de vida, defendiendo la idea de que los libres mercados y el libre comercio lograrán eliminar la pobreza a nivel global. Se busca que se privatice los activos, logrando una mayor competencia, permitiendo eliminar trámites burocráticos, mejorar la calidad de los productos, reducir costos y que el consumidor salga beneficiado. Por su parte, el Estado deberá favorecer y preservar las condiciones necesarias para el desarrollo de dichas prácticas como la calidad e integridad del dinero (Harvey, 2007).

Asimismo, debe de disponer de una estructura militar y policial para salvaguardar y garantizar la libertad y los derechos de la propiedad privada y el funcionamiento de los mercados. En cuanto a su participación en los mercados, su intervención debe de ser mínima, debido a que está limitado a “obtener la información necesaria para anticiparse a las señales del mercado (los precios) y porque es inevitable que poderosos grupos de interés distorsionen y condicionen estas intervenciones estatales (en particular en los sistemas democráticos) atendiendo a su propio beneficio” (Harvey, 2007, p. 9). La libertad personal e individual está asegurada, ya que cada persona es responsable y debe buscar su propio bienestar, por lo que los sistemas de protección social, educativos, entre otros, deben ser privatizados, “el éxito o fracaso personal depende de las virtudes empresariales o de los fallos personales” (Harvey, 2007, p. 73).

Los espacios en donde no existen mercados como la tierra, la educación, la salud, la seguridad social o la contaminación ambiental, el Estado debe crear políticas solo cuando sean necesarias. Las limitantes de la libertad comercial y de capital como los aranceles, controles medioambientales, entre otros, deben de ser eliminados, excepto aquellos que sean

determinantes para los intereses nacionales. Dentro de la estructura del Estado neoliberal, se busca que los gobiernos sean dirigidos por las élites y expertos. El programa es claramente conservador, ya que incluye muchos valores de la derecha empresarial como el libre mercado, el control del déficit y la reducción del gasto social (Escalante, 2016).

### **2.1.1 EL MODELO KEYNESIANO: AUGE Y CRISIS DE UN MODELO DE BIENESTAR**

Para poder comprender las características y el impacto de las políticas neoliberales en México, es importante analizar los antecedentes internacionales que dieron lugar a su origen. Su surgimiento se remonta a una serie de modelos económicos que fueron implementados posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que hubo una reorganización de las diversas estructuras estatales, así como de las relaciones internacionales, con el fin preservar el sistema capitalista que se había visto amenazado como en la Gran Depresión de 1929. Se necesitaba reconfigurar un modelo económico que lograría superar las versiones ortodoxas del capitalismo y del comunismo, por lo que se firmaron los acuerdos de *Bretton Woods* en julio de 1944 en Estados Unidos, para garantizar el desarrollo, la estabilidad financiera internacional y la liberación del comercio. Su objetivo era poder responder ante los problemas monetarios y financieros (Martínez Rangel, Reyes Garmendia, 2012).

Por medio de los acuerdos de *Bretton Woods*, se creó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, con el fin de regular y estabilizar las relaciones internacionales e incentivar el libre comercio mediante un sistema de cambios fijos basado en la conversión del dólar estadounidense a oro en un precio fijo (Harvey, 2007). La razón de establecer el dólar como patrón de cambio internacional, fue por considerarse a los Estados Unidos como ganador de la Segunda Guerra Mundial, poseer la bomba atómica y por ser la nación con el menor daño territorial y productivo, además de la gran acumulación de capital que logró durante el conflicto (Martínez Rangel, et al, 2012).

La particularidad de los Estados socialdemócratas, democratacristianos y dirigistas que habían emergido tras la Segunda Guerra Mundial, parte de sus objetivos eran impulsar el empleo, lograr el crecimiento económico y el bienestar social, en el que el poder avanzara en conjunto con los procesos del mercado, interviniendo o sustituyéndolo, según fuera la necesidad para alcanzar sus objetivos. Estas políticas eran conocidas como *keynesianas* o

*liberalismo embridado*, las cuales tenían un fuerte compromiso de clase, siendo regulador entre el capital y la fuerza de trabajo, interviniendo en una política industrial, así como en políticas sociales que permitieran salarios estables, educación, asistencia sanitaria, entre otros (Harvey, 2007). La idea central del Estado era combatir la pobreza y lograr “el desarrollo mediante una combinación de proteccionismo, empresas públicas, inversión en infraestructura, estímulos fiscales, subsidios al consumo, gasto social [...] aumentar la alfabetización [y] los índices de escolaridad” (Escalante, 2016, p. 66).

El modelo keynesiano dependió, en gran medida, a que Estados Unidos estuvo dispuesto a asumir el déficit de las naciones que lo padecieran, así como consumir cualquier producto excedente, logrando la expansión de mercados y la exportación en países como Japón; sin embargo, en el caso latinoamericano y en el sureste asiático, fue desigual. Esto permitió un importante crecimiento económico en países capitalistas desarrollados en las décadas de 1950 y 1960 (Harvey, 2007). Para el caso de América Latina, se implementó el modelo de sustitución de importaciones y la creación de un mercado común latinoamericano, en el que el Estado jugó un papel determinante en la economía, lo que permitiría un notable crecimiento de la renta per cápita, pero esto fue cuestionado ya que el crecimiento no se vio reflejado en la población (Martínez Rangel, et al, 2012).

El modelo keynesiano logró “crear mercados regulados, fiscalidad progresiva, intervención estatal, contratos colectivos, seguridad social, políticas contra-cíclicas [políticas sociales como el crecimiento de] la educación pública, los sistemas de salud pública, se introdujo el seguro de desempleo [y] aumentaron los salarios” (Escalante, 2016, p. 65).

A pesar de ello, a finales de los años setenta, la economía comenzó a fragmentarse en los países desarrollados a causa de la acumulación de capital provocando desempleo, inflación, desplome de los valores activos de las acciones, propiedades y ahorros, disminución de ingresos para el Estado y una crisis fiscal a causa de las políticas sociales (Harvey, 2007). Esto se acentuó tras la guerra árabe-israelí en 1973, en la que la Organización de los Países Árabes Exportadores de Petróleo, decidió dejar de exportar el crudo a países que apoyaron a Israel durante la guerra, situación que afectó al Estado, a las élites y a la clase trabajadora de países occidentales, provocando una inflación que impactó en los precios del petróleo.

El descontento por la crisis de la acumulación de capital en los países capitalistas desarrollados, se extendió a los movimientos obreros y sociales, lo que apuntaba a buscar una

alternativa con mirada hacia el socialismo, exigiendo reformas globales e intervención del Estado, lo que amenazaba a las élites económicas y las clases dominantes. Como respuesta, en 1971 se abandonó el tipo de cambio fijo en el que el oro dejaría de funcionar como una divisa internacional (Harvey, 2007).

De igual modo, se buscó implementar un nuevo orden económico internacional. Esta idea había surgido desde el año 1964 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y, de igual manera, en diversas universidades se argumentaba que las relaciones económicas entre los países no eran equitativas, ya que beneficiaban a uno a costa de la pérdida de los otros, por lo que la única solución era implementar un sistema socialista (Escalante, 2016).

Se implementaron diversas alternativas en las políticas económicas como intensificar el control del Estado, regular la economía por medio de corporativas con base en las demandas populares y de los trabajadores por medio de “medidas de austeridad, políticas de ingresos e incluso del control de precios y salarios” (Harvey, 2007, p. 19). Estas medidas fueron apoyadas por los partidos de izquierda europeos logrando una importante influencia popular detrás de esos programas, alcanzando el poder en Portugal, Francia, España, Gran Bretaña y en la región escandinava. Para el caso estadounidense, el Partido Demócrata, junto con el presidente Richard Nixon (1969-1974), hicieron diversas reformas legislativas de seguridad social, laborales, civiles, protección del consumidor y del medio ambiente. Sin embargo, los partidos de izquierda no fueron más allá de las tradicionales propuestas socialdemócratas y corporativistas, por lo que hubo un exhaustivo debate entre los que estaban a favor de las políticas de izquierda y los que estaban de acuerdo con la liberación del poder financiero y de las corporaciones y reestablecer las libertades de mercado (Harvey, 2007).

En tanto, Estados Unidos experimentó un primer intento (fallido) de limitar el gasto público. Se desregularizaron los mercados de energía, telefonía, aviación, servicio postal y las tasas de interés de las tarjetas de crédito. El presidente estadounidense James Carter (1977-1981) solicitó, a la Reserva Federal, medidas para controlar la inflación, aumentando las tasas de interés, lo que detuvo la inflación, pero aumentaron los acreedores y deudores. La deuda de los países en vías de desarrollo aumentó, en parte por el desgaste del modelo de industrialización, dando como resultado una crisis global, por lo que urgía implementar un sistema eficaz (Escalante, 2016).

Estas circunstancias incrementaron el radicalismo popular en la década de 1970 que buscaba libertades individuales y se oponía al Estado, la burocracia, la clase política y a los sindicatos, circunstancias que supieron aprovechar los neoliberales para proponer una alternativa que había sido estructurada en diversas universidades, fundaciones y centros de estudio, ofreciendo un programa económico completo distinto al modelo keynesiano (Escalante, 2016).

Años atrás Chile ya había experimentado la alternativa económica neoliberal. Desde mediados de 1960 un grupo de 150 estudiantes chilenos –conocidos como los Chicago boys– habían sido becados en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, los cuales articularon un programa neoliberal para Chile (Escalante, 2016). Años más tarde en 1973, tras el golpe de estado chileno, permitió que se consolidara el experimento neoliberal. La forzosa privatización de medios de producción, demostró los beneficios de la acumulación de capital para las clases dominantes chilenas, así como para inversionistas extranjeros a costa de una creciente desigualdad social (Harvey, 2007). Es importante recalcar que el modelo chileno no fue atractivo para las demás naciones latinoamericanas que atravesaban la crisis económica, debido a la forma en cómo se implementó el sistema en un Estado de carácter dictatorial.

### **2.1.2 EL NEOLIBERALISMO, UNA ALTERNATIVA NEOCONSERVADORA ANTE LA CRISIS DEL MODELO KEYNESIANO**

La crisis que desencadenó el modelo keynesiano en países capitalistas del primer mundo, fue clave para la implementación del sistema neoliberal. Los primeros en incursionar el camino hacia el nuevo sistema fueron Reino Unido y Estados Unidos, sin embargo, no lograron importantes avances económicos. Se logró reducir la inflación y las tasas de interés; no obstante, se elevó el desempleo y se recortaron los programas sociales disminuyendo la calidad de vida de la población, pero, a nivel mundial, hubo un bajo crecimiento y una alta desigualdad en la renta (Harvey, 2007). En 1982 los modelos keynesianos habían sido descartados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, siendo sustituidos por una serie de reformas neoliberales conocidas como el *Consenso de Washington*. Se ejerció presión en Japón, Europa y el resto del mundo a que adoptaran el nuevo modelo (Harvey, 2007).

La instauración del neoliberalismo, en la gran mayoría de los países de América Latina en la década de los ochenta, giró en torno al estancamiento económico que se vivía, debido a los altos precios del petróleo y el aumento de los intereses de la deuda externa, lo que obligó a varios países latinoamericanos a suspender los pagos con los organismos financieros internacionales. El dólar se apreció y la exportación de materias primas cayó. El modelo de sustitución de importaciones había fracasado por lo que se buscó un “modelo económico abierto, estable y liberalizado” (Martínez Rangel, et al, 2012, p. 43). Inmediatamente, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional renegociaron la deuda, en el que la ayuda se condicionó a adoptar el Programa de Ajuste Estructural en el que se les imponía el sistema neoliberal, es decir, disminuir el gasto público, reducir el déficit, controlar la inflación, privatizar las empresas estatales y una apertura comercial (Escalante, 2016).

Las teorías neoliberales fueron presentadas de manera formal en noviembre de 1989, a través de una conferencia llamada *Latin American Adjustment: ¿How Much Has Happened?*, llevada a cabo por el Instituto Internacional de Economía, en la cual el economista británico John Williamson, presentó las principales reformas que Washington consideraba necesarias para la recuperación económica de América Latina (Martínez Rangel, et al, 2012). El Consenso de Washington consta de diez instrumentos de política económica que definían los modelos del neoliberalismo estadounidense y británico para contrarrestar los problemas económicos globales, siendo los siguientes:

- 1) *Disciplina fiscal*: las políticas proteccionistas desencadenaron el déficit fiscal caracterizado por la inflación, el déficit de pagos y la fuga de capitales lo que debilita la confianza de los inversionistas.
- 2) *Reordenación de las prioridades del gasto público*: se necesitaba hacer un recorte al gasto público para reducir el déficit presupuestario sin tener que recurrir a los impuestos, los subsidios destinados a las empresas del Estado se verían perjudicados, ya que se considera un gasto excesivo, lo que permite destinar dichos recursos a áreas de carácter social.
- 3) *Reforma fiscal*: llevar a cabo una reforma fiscal para ampliar la recaudación tributaria, reducir el gasto público, solucionar el problema del déficit y tener la garantía del crecimiento económico.

- 4) *Liberalización financiera*: los intereses los determina el propio mercado para evitar la asignación inadecuada de recursos generada por la restricción de créditos por parte de burócratas. De igual forma, los intereses deben ser positivos para evitar la evasión de capitales e incrementar el ahorro. Si los intereses son moderados, permitiría el crecimiento de inversiones y evitaría la deuda pública.
- 5) *Tipo de cambio competitivo*: es un requisito para el crecimiento sustentado en las exportaciones. Si el tipo de cambio es competitivo permitirá a los inversionistas invertir en industrias de exportación, fundamentales para la recuperación de América Latina.
- 6) *Liberalización del comercio*: eliminar los permisos de importación y ser reemplazados por aranceles que faciliten el flujo de mercancías. La importación de insumos necesarios para la exportación debe liberarse, concediéndoles a los exportadores el derecho a descuentos sobre los aranceles de insumos importados y deben reducirse con el tiempo.
- 7) *Liberalización de la inversión extranjera directa*: la inversión extranjera permite la entrada de capital, conocimiento y experiencia en la producción de mercancías para el mercado nacional o para las exportaciones. Existen dos opiniones al respecto: una es la que está a favor de que la inversión extranjera pueda operar libremente a cambio de que esta adquiera ciertas obligaciones con el Estado, evitando recurrir al financiamiento externo y previniendo que la deuda externa se incremente. La otra opinión es que estos trueques, entre la iniciativa privada y el Estado, aumenten el déficit fiscal, generando una deuda pública interna.
- 8) *Privatizaciones*: su objetivo es liberar el presupuesto del Estado por medio de la privatización de las empresas gubernamentales, permitiendo una gran cantidad de recursos que son destinados para políticas sociales. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, apoyan dicha medida, con el fin de buscar el crecimiento económico y erradicar los problemas sociales latinoamericanos.
- 9) *Desregulación*: las regulaciones de los países latinoamericanos obstaculizan la entrada de empresas nacionales y estatales, por lo que era necesario la modificación de leyes y reglamentos que permitan la desregulación, que se relaciona con la privatización de empresas del Estado y la entrada de inversión, tanto nacional, como extranjera.

10) *Derechos de propiedad*: se busca crear derechos de propiedad que estuvieran asegurados y que permitieran una eficiente operación del sistema capitalista, además de crear un sistema jurídico para estimular el desarrollo de la iniciativa privada (Martínez Rangel, et al, 2012).

Se argumentaba que dichos planteamientos permitirían recuperar la economía latinoamericana, a su vez, se especificaban ciertas virtudes para que las naciones adoptaran el nuevo sistema. Los argumentos eran que el sector privado puede gestionar mejor los recursos públicos, por lo que el Estado debe de disminuir su intervención en la economía, aunque se traten de servicios básicos. El papel del Estado es convertirse en un facilitador de los negocios privados, regular los excesos del mercado, creando programas para combatir la pobreza o la contaminación y lograr la paz social. La globalización buscaba abrir las fronteras de las naciones (en cuanto a capital, no a personas), lo que permitiría una mayor inversión extranjera, permitiéndoles el suministro de las tecnologías que carecen. Finalmente, la prosperidad de las élites permitirá el crecimiento de la riqueza llegando hasta las clases más desfavorecidas (Martínez Rangel, et al, 2012).

Los resultados fueron positivos con respecto al control de la inflación y la reducción del déficit fiscal, hubo una mayor inversión extranjera y aumentaron las exportaciones. Sin embargo, el crecimiento económico fue bajo, además de que las condiciones de vida de la población empeoraron, registrándose mayores niveles de pobreza, desigualdad en la distribución de ingresos y crisis económicas (Armijo, Talavera, 2007).

Por su parte, John Williamson afirmó que las problemáticas que presentó el Consenso de Washington de 1989, se debieron a que no se hizo énfasis en cómo evitar las crisis, no se le dio importancia al fortalecimiento de las instituciones para estimular el crecimiento y que se buscó un crecimiento acelerado y no un crecimiento equitativo, por lo que Williamson, junto con el economista peruano, Pedro Pablo Kuczynski, plantearon ,en 1998, una segunda reforma al consenso que buscaba completar y complementar el consenso original para evitar las crisis, lograr el crecimiento económico, la redistribución el ingreso y combatir la pobreza (Martínez Rangel, et al, 2012). En seguida se transcriben:

- 1) Reforma política legal.

- 2) Instituciones reguladoras.
- 3) Anticorrupción.
- 4) Flexibilidad del mercado laboral.
- 5) Acuerdo con la Organización Mundial del Comercio.
- 6) Códigos y estándares financieros.
- 7) Apertura “prudente” de la cuenta capital.
- 8) Regímenes de tipo de cambio no intermediados.
- 9) Redes de seguridad social.
- 10) Reducción de la pobreza.

Los avances tras la implementación de las reformas fueron escasos. Los problemas persisten y la desconfianza de la población hacia las instituciones del Estado se agudiza. Las promesas del crecimiento y auge económico, para los países en vías de desarrollo, se derrumban ante las múltiples crisis económicas que experimentan; sin embargo, el Consenso de Washington se ha definido, a sí mismo, como una etapa exitosa para alcanzar las políticas de la globalización y el neoliberalismo.

## **2.2 CARACTERÍSTICAS POLÍTICO-ECONÓMICAS DEL NEOLIBERALISMO EN MÉXICO**

En este apartado se presenta un análisis sobre los últimos 90 años de la historia de México, desde una perspectiva de las políticas económicas y su impacto social. Se estudiaron tres momentos históricos: Las políticas económicas posrevolucionarias, que comprenden de la década de 1930 a 1946, el modelo de sustitución de importaciones de 1946 a 1982 y el neoliberalismo de 1982 a la actualidad.

### **2.2.1 EL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES: DEL CRECIMIENTO A LA CRISIS ECONÓMICA EN MÉXICO**

La vida política del México contemporáneo, se caracterizó por la permanencia de un gobierno unipartidista, en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantuvo sin interrupciones en el poder por más de 70 años (1929-2000). Como se puntualizó en el apartado

anterior, las políticas neoliberales se instauraron en México a finales de la década de 1980, en el que el PRI, junto con el Estado, tuvieron que modificar el discurso heredado de la Revolución Mexicana por uno globalizador que prometía acabar con los males sociales y posicionar a la nación dentro de los países del primer mundo.

Las políticas del partido oficial, desde mediados de la década de 1930, se habían caracterizado por ser las de un Estado corporativista capaz de organizar, controlar y reprimir movimientos de oposición de obreros, campesinos o clases medias. Al igual que la gran mayoría de las naciones latinoamericanas, en la década de 1940, el Estado mexicano adoptó el modelo de sustitución de importaciones, además de exportar materias primas y mercancías a Estados Unidos. El Estado nacionalizó diversas industrias como la petrolera, la energética, de transportes, entre otros, además de crear otras básicas. Asimismo, hubo industrias de capital privado estadounidense bajo el programa de maquilas en la zona fronteriza entre ambas naciones, lo que le permitió a Estados Unidos contar con una mano de obra mexicana barata, además de poder operar libremente sin ningún tipo de aranceles (Harvey, 2007).

Hubo un importante crecimiento económico en México gracias al modelo keynesiano pero la distribución de la riqueza no fue equitativa para todos los sectores de la población. Esto se evidenció con el descontento popular en las décadas de 1950 y 1960, como el movimiento ferrocarrilero y magisterial en 1958, el médico en 1965 y el estudiantil en 1968. Los tres primeros exigían mejores salarios y acabar con el *charrismo* sindical; el estudiantil buscó un cambio democrático, acabar con el autoritarismo, alcanzar mayores libertades, tanto políticas como civiles y acabar con las grandes desigualdades que caracterizaban al país. Todas fueron reprimidas, pero la más polémica fue la estudiantil con la desaparición y el asesinato de un número incierto de manifestantes el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

La crisis económica mundial de la década de 1970 y el incremento del descontento social hizo que el Estado mexicano intentara recuperar su legitimación, por lo que buscó fortalecer las empresas privadas más débiles, con el fin de que sirvieran como fuentes de empleo para la clase obrera. En este mismo periodo, las empresas estatales aumentaron al igual que sus trabajadores, los resultados fueron pérdidas monetarias, por lo que recurrieron a solicitar préstamos para poder mantenerlas. En este contexto, el aliento esperanzador para México fue el descubrimiento de yacimientos petroleros, abriendo las posibilidades de nuevas

inversiones por parte de bancos estadounidenses; sin embargo, la deuda externa crecería de 6,800 millones de dólares en 1972 a 58,000 millones en 1982 (Harvey, 2007).

La situación empeoraría ante la recesión económica que se vivía en Estados Unidos, lo que hizo que se redujera la demanda de productos mexicanos y los intereses de la deuda aumentaran, aunado a la caída de los precios del petróleo, lo que disminuyó el ingreso para el Estado por lo que se declaró en quiebra en 1982. Hubo una salida de capitales mientras la moneda mexicana se devaluaba, por lo que el gobierno del presidente José López Portillo (1976-1982), nacionalizó los bancos, medida que fue rechazada por las élites empresariales a nivel global. Harvey (2007) interpreta a Claudio Lomnitzel, quien argumenta que los resultados de la crisis fueron los siguientes: cayó la renta per cápita a una tasa del 5% anual, el valor del salario cayó entre el 40 y 50%, la inflación superó el 100%, el gasto de bienes públicos decayó, los subsidios para alimentos se restringieron a la clase más desfavorecida y la educación pública y los servicios sanitarios se redujeron. Para el caso específico de la Ciudad de México, en 1985 se redujeron los gastos para los servicios públicos básicos, lo que incidió en el incremento de la criminalidad, convirtiéndola en una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica (Harvey, 2007).

Desde la década de 1980 se intensificaron y radicalizaron diversos grupos de oposición en distintas regiones del país que optaron por las movilizaciones guerrilleras de influencia comunista. Ante esto, el Estado mexicano tomó medidas de represión militar, conocidas como la *Guerra Sucia*, dejando, al igual que en el movimiento estudiantil de 1968, un número desconocido de desapariciones y asesinatos, además de violaciones a los Derechos Humanos, los cuales han sido considerados como crímenes de Estado.

## **2.2.2 NEOLIBERALISMO EN MÉXICO: EL DESMANTELAMIENTO DE UN ESTADO BENEFACTOR**

La crisis había llevado a altos puestos del Estado a diversos economistas que se habían formado en universidades estadounidenses, en su mayoría con estudios de posgrado, a este grupo se le conoce como los *tecnócratas*, los cuales buscarían alternativas económicas para rescatar a México de las dificultades económicas que atravesaba (Mayer Serra, 2017).

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), se buscó acabar con el endeudamiento y la crisis económica, por lo que se decantó por aliarse con el sector

empresarial extranjero. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro Estadounidense, buscaron rescatar el país haciendo hincapié a que México asumiera una austeridad presupuestaria y adoptara las reformas neoliberales como la privatización, la reorganización del sistema financiero para el beneficio de los intereses extranjeros, la apertura de mercados para el capital extranjero, la reducción de aranceles y la creación de mercados laborales más flexibles. Estas medidas permitieron que el Banco Mundial otorgara los préstamos que México había solicitado (Harvey, 2007).

En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), continuó el proceso hacia las reformas neoliberales. A pesar de que, por primera vez en la historia el PRI no obtuvo las tres cuartas partes de la Cámara de Diputados, Salinas de Gortari estableció una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), para continuar con el proceso neoliberal. Las privatizaciones se intensificaron, ya que de 1100 empresas con las que contaba el estado en 1982, se redujeron, únicamente, a 200 para el año 2000, quedando la gran mayoría en manos del capital extranjero. Los bancos que se habían nacionalizado en el año de 1982, fueron privatizados nuevamente en el año de 1990. Se reestructuraron las relaciones laborales perjudicando los intereses de la clase trabajadora y hubo amplios despidos en el sector estatal. Dichas reformas, aunado al fraude electoral de 1988, desencadenarían un descontento popular, dando lugar a varias luchas obreras que fueron reprimidas por el gobierno. Diversos líderes obreros fueron encarcelados acusados de corrupción, siendo sustituidos por otros que operaron a favor de los intereses del PRI (Harvey, 2007).

Salinas de Gortari creó el programa de producción de maquilas, las cuales se establecieron en la frontera entre México y Estados Unidos. En 1991 se hizo una reforma agraria, la cual buscaba la eliminación del sistema ejidal heredado de la revolución y le concedía el derecho al sector agrícola de poseer tierras, pero con la reforma se buscó privatizar las tierras para el beneficio extranjero. Para finales de su sexenio, se logró, satisfactoriamente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, teniendo como objetivo, eliminar las barreras de comercio, facilitar la circulación de bienes y servicios y aumentar las inversiones, entre otros (Harvey, 2007).

Estos factores desencadenaron la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, en el año 1994, el cual se oponía a todas las reformas neoliberales en México y además iniciar una “lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud,

educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz [para tener un] país libre y democrático" (Comandancia General del EZLN, 1993).

Todas las reformas neoliberales desencadenaron una crisis económica durante los primeros días del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), conocida como el *Efecto Tequila*, debido al aumento de intereses por parte de la Reserva Federal estadounidense, haciendo que el peso mexicano, tuviera que devaluarse, lo que le imposibilitaba al gobierno mexicano solventar la deuda, ya que no tenía la capacidad de movilizar suficientes dólares para reembolsarse. El presidente estadounidense Bill Clinton, otorgó un monto de 47,500 millones de dólares para rescatar al país, a pesar de que el congreso estadounidense se había negado. El interés de Clinton era evitar la pérdida de puestos de trabajo en industrias que exportaban recursos a México, que la inmigración ilegal aumentara y que se deslegitimara el neoliberalismo y el TLCAN. La crisis benefició a Estados Unidos, ya que les posibilitó la compra de industrias paraestatales a precios muy bajos. En el año 2000, hubo una ola de desempleo de las maquilas ubicadas en la frontera, debido a que China se convirtió en una zona que requería una menor inversión con una mano de obra más barata, ocasionando que diversas empresas en México movilizaran su capital hacia el lejano oriente (Harvey, 2007).

El cambio de siglo estuvo marcado por una transición democrática pacífica. Por primera vez, en setenta años de historia, el PRI dejó de ocupar la silla presidencial para dar paso a dos sexenios gobernados por el PAN, de 2000 a 2012, posteriormente regresó el PRI de 2012 a 2018 y, finalmente, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se encuentra en el poder desde 2018.

Este periodo se caracteriza por un crecimiento económico lento. Entre 2000 y 2014, creció el 2.1%; sin embargo, entre 2001 y 2009 sufrió caídas importantes, pero se registró una baja inflación y una devaluación gradual del peso mexicano con relación al dólar. El Banco de México alcanzó su máximo histórico, logrando, en 2015, tener una reserva de 199,000 millones de dólares. Las exportaciones crecieron ocho veces, pero eran, principalmente, de empresas transnacionales, por lo que las finanzas públicas no mejoraron y las haciendas locales siguieron dependiendo de los apoyos federales, generando un endeudamiento gubernamental. Los salarios se mantuvieron estables, sin embargo, la población no recuperó su poder adquisitivo que había perdido desde la década de 1970. En contraste, los grandes empresarios lograron acrecentar sus fortunas. En 2008, hubo una crisis económica mundial

que provocó la caída de la económica mexicana, generando el despido de 250,000 empleados de las maquilas y la disminución de las remesas que sustentaban millones de hogares *pobres*. Entre 2005 y 2008, la producción y exportación de petróleo se redujo y la importación de gasolina aumentó diez veces (Escalante Gonzalvo, García Martínez, Jáuregui, Vázquez, Speckman Guerra, Garciadiego, Aboites Aguilar, 2020).

Durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), no se puso en práctica ninguna nueva reforma distinta a las ya establecidas. A pesar de que era defensor de las reformas neoliberales, el gobierno se limitó a administrar la estabilidad macroeconómica. Intentó realizar una reforma fiscal, pero al no contar con el respaldo de ninguna cámara (debido a que en ambas cámaras, los miembros mayoritarios eran priistas), sus propuestas fueron rechazadas (Mayer Serra, 2017).

Sin embargo, a pesar de que el sexenio de Felipe Calderón se encontraba con las mismas limitantes de su antecesor, sí logró llevar a cabo una serie de reformas, como la fiscal, que tuvo resultados imperceptibles en la recaudación de impuestos. La reforma energética no logró su objetivo original, debido a que el poder Legislativo no aprobó la realización de la inversión privada en las áreas de explotación, refinación y distribución, además de rechazar una mayor autonomía a Petróleos Mexicanos (PEMEX). La reforma al sistema de pensiones, que había iniciado desde 1997, se potenció con la creación del *Sistema Nacional de Pensiones*, logrando su consolidación, debido a que buscó asegurar a todas las personas no asalariadas a través del Seguro Popular. Se promulgó la Ley Federal de Competencia Económica, la cual pretendía brindar mayores oportunidades a pequeñas compañías. Finalmente, la reforma laboral buscó reducir el costo de la mano de obra, incrementar el empleo para jóvenes, desplazando a trabajadores mayores, despenalizar la flexibilización funcional y numérica, reducir el poder sindical en cuanto a las decisiones colectivas y desincentivar el expediente de huelgas (Gutiérrez, 2014).

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el poder Ejecutivo, al no contar con una mayoría de priistas en el congreso, pactó con los legisladores del PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el llamado Pacto por México, estrategia que le permitió al presidente aprobar diversas reformas constitucionales como la energética, la educativa, la laboral, la de telecomunicaciones, la financiera, la hacendaria, la electoral, la penal, la de competencia económica, la de seguridad social y la de transparencia (Gutiérrez,

2014). No obstante, las reformas no supusieron un cambio positivo, ya que estuvieron marcadas por un estancamiento económico y por una serie de actos de corrupción y represión social, como el caso Ayotzinapa en 2014.

### **2.2.3 CAMBIO DE RÉGIMEN ... ¿EL FIN DEL NEOLIBERALISMO EN MÉXICO?**

El hartazgo de algunos sectores de la sociedad mexicana, ante las reformas neoliberales y los actos de corrupción de pasadas administraciones, le permitieron a Andrés Manuel López Obrador y a los candidatos de Morena y sus aliados –Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES)–, asumir la presidencia de la república y lograr la mayoría absoluta en ambas cámaras para el periodo 2018-2024. A través del documento *Proyecto de Nación 2018-2024*, López Obrador hizo énfasis a la erradicación de la corrupción, reestablecer la paz y combatir la pobreza (Padilla Jiménez, 2020). De igual forma, en su retórica, ha señalado acabar con las políticas neoliberales.

Como parte de la política económica, durante el primer año de gobierno implementó una importante inversión en PEMEX para incrementar la producción y refinación petrolera. Por otro lado, emprendió un proyecto de construcción y modernización de puertos y aeropuertos, así como la construcción del *Tren Maya*. Como medida para combatir la pobreza, creó las *Becas Benito Juárez* para estudiantes de educación básica, media superior y superior, así como la pensión para adultos mayores. De acuerdo con Padilla Jiménez (2020), aún falta implementar una reforma fiscal que permita lograr un *Estado de Bienestar* y crear una política científica, tecnológica e industrial.

En la implementación de las políticas “antineoliberales” de López Obrador, en 2021 propuso una serie de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, buscando fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y evitar abusos por parte de empresas particulares que están inmersas en el mercado eléctrico. Sus argumentos, del pasado 2 de febrero de 2021, fueron que, tanto PEMEX como la CFE, necesitan ser rescatadas de los particulares. Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), limita la libre competencia, además de condicionar la generación de energías limpias (Daen, 2021). A pesar de ello, las reformas se han visto bloqueadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerando anticonstitucional las propuestas lanzadas por el presidente de México.

Actualmente, la pandemia del *coronavirus* (Covid-19), ha generado números negativos para la economía nacional. El Indicador Global de la Actividad Económica se mantuvo en números similares desde diciembre de 2018 a marzo de 2020, sin embargo, al siguiente mes, hubo una fuerte caída (INEGI, 2020b). En cuanto a la exportación e importación de mercancías, hubo una severa caída en mayo de 2020, pero al siguiente mes tuvo una importante recuperación (INEGI, 2020a). La tasa de desempleo, al inicio de 2020, había 7 millones 700 mil desempleados y la cifra creció a 21 millones durante la pandemia (Xantomila, 2020). El salario mínimo, entre el 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2020, creció un 19.6% y del 1 de enero de 2020 a la actualidad, hubo un incremento del 18.1% (Secretaría del Trabajo y Prevención Social, 2020). Hacer un diagnóstico general de los resultados en materia de política económica es complicado debido al reducido tiempo que lleva el sexenio actual.

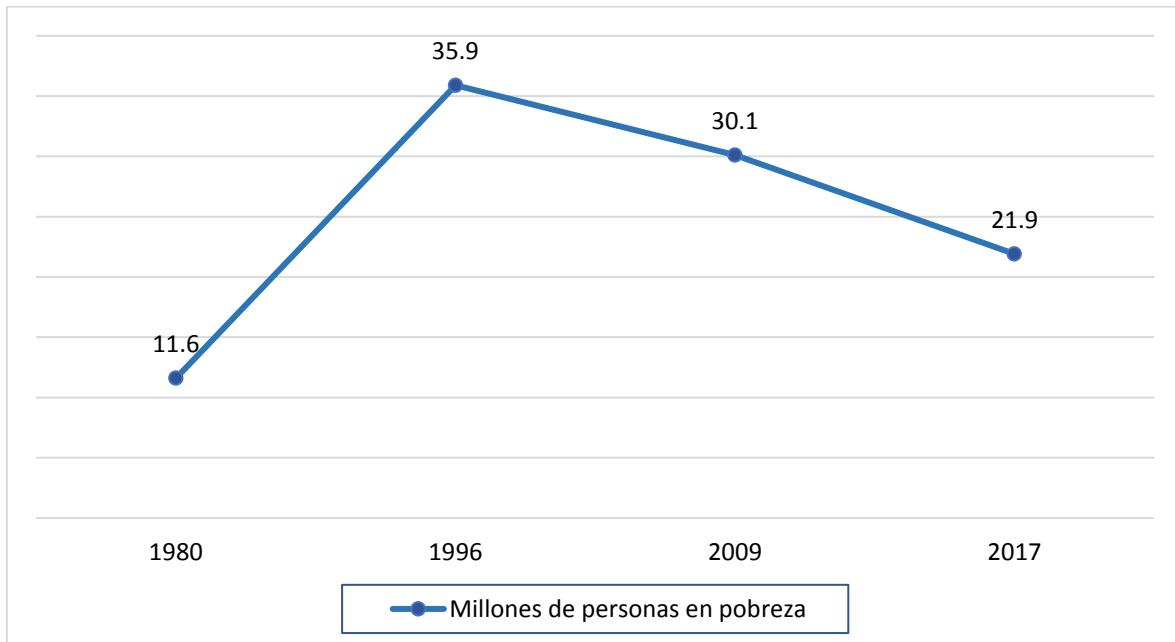
La perspectiva general de las políticas económicas neoliberales en México, no dista mucho a las de Latinoamérica, que fueron presentados en apartados anteriores. Por un lado, emergió un grupo de 24 millonarios mexicanos que se beneficiaron de las privatizaciones adquiriendo bancos, industrias siderúrgicas, refinerías, hoteles, restaurantes, plantas químicas y empresas de telecomunicación, además de obtener concesiones en puertos, autopistas de cobro y telefonía (Harvey, 2007). Carlos Slim se convirtió en el hombre más rico de México y en uno de los más ricos del mundo, en contraste, la desigualdad, la marginación y la pobreza siguen vigentes en amplios sectores de la población, situación que se aborda en el siguiente apartado.

### **2.3 LOS ESTRAGOS DEL NEOLIBERALISMO EN MÉXICO: POBREZA, DESIGUALDAD, MARGINACIÓN Y DESERCIÓN ESCOLAR**

Las dinámicas globalizadoras, junto con las políticas neoliberales, tanto a nivel internacional como en México, han permitido un importante crecimiento económico, en contraste, el desarrollo económico social y cultural, es bajo. A partir de la crisis petrolera y de la implementación de las políticas neoliberales en la década de 1980 en México, los índices de pobreza, desigualdad y marginación aumentaron como se pueden apreciar en la siguiente gráfica:

Gráfica 2

*Evolución histórica de la pobreza alimentaria en México. 1980- 2017*



Fuente: Elaborado con datos de Figueroa Hernández, Pérez Soto y Godínez Montoya (2018).

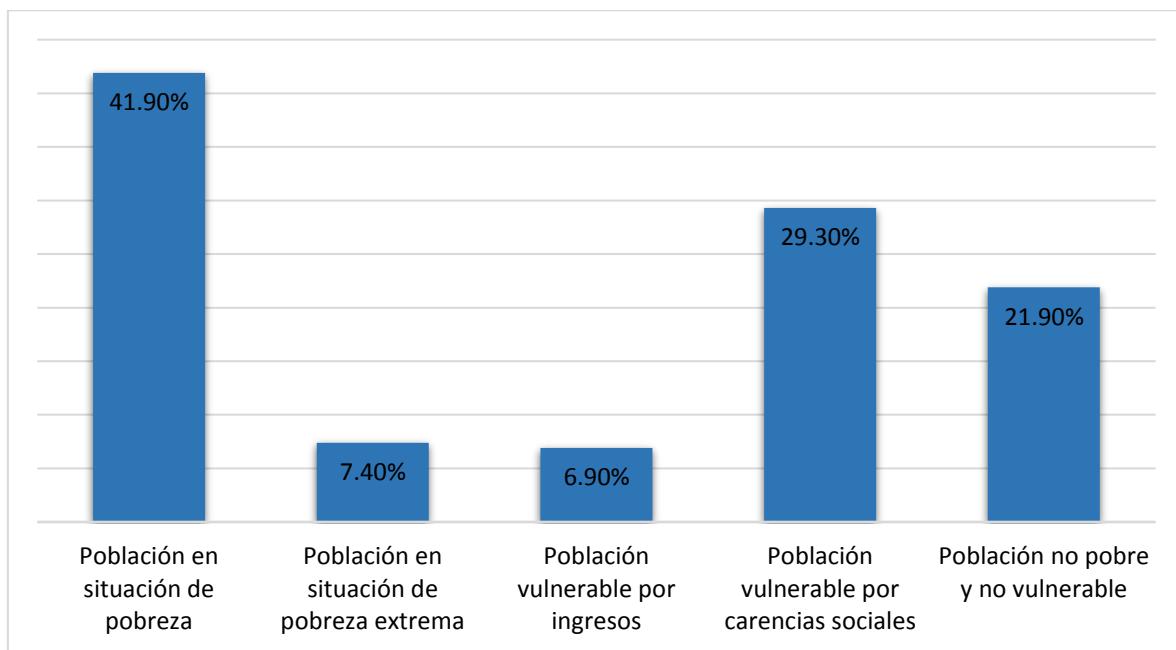
La gráfica demuestra que la pobreza aumentó durante las décadas de 1980 y 1990, pero hubo una recuperación durante la década de 2010, sin embargo, los niveles de pobreza siguen siendo preocupantes.

El fenómeno de la pobreza y la desigualdad que impera en México se puede entender a través de tres fenómenos que explican Pérez Sáinz y Mora Salas (2007): la *transnacionalidad de las élites*, es decir, que la acumulación de las riquezas producidas en las diversas actividades económicas está dejando de ser de la nación, para pasar a manos de empresas transnacionales; la *fragmentación de los sectores medios*, donde la desintegración es cada vez más evidente de la clase media a causa del ingreso del capital extranjero que poco a poco la ha desplazado hacia estratos más bajos de la sociedad y; finalmente, la *exclusión social*, que afecta a amplios sectores de la sociedad que viven en alguna condición de marginalidad. Max Weber, teórico que fundamentó parte de su trabajo en la *teoría marxista*, en sus postulados sobre la clausura social, permite entender cómo los grupos dominantes crean monopolios sobre los recursos que son de gran importancia para la sociedad, impidiendo que

otros grupos logren acceder a ellos como una forma de dominación y control, por lo que, en este contexto, el término exclusión se entiende como la negación del acceso a recursos para los grupos de estratos más bajos. Por su parte, la *teoría crítica*, plantea que la configuración social está determinada por dos grupos: *los dominantes* y *los dominados*. Los primeros, son aquellos que tienen en su poder los monopolios controlados por las empresas transnacionales; los segundos, son los grupos de la sociedad que son excluidos, explotados y reprimidos como lo son la clase obrera, las mujeres, las comunidades indígenas, personas que sufren de alguna discapacidad, los grupos LGTB, entre otros, generando altos niveles de desigualdad socioeconómica. A continuación, se muestran dos gráficas: la primera indica los niveles de pobreza y la segunda representa los indicadores de bienestar en México.

Gráfica 3

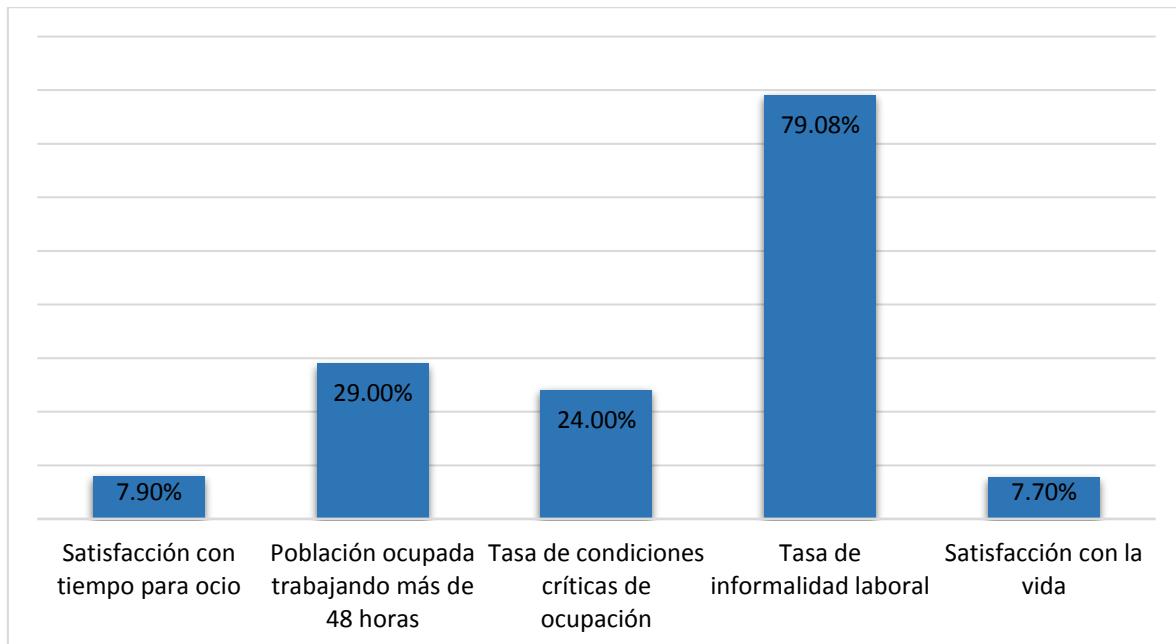
*Pobreza en México. 2018*



Fuente: Elaborada con datos del CONEVAL (2018).

Gráfica 4

*Niveles de bienestar en México. 2014-2019*



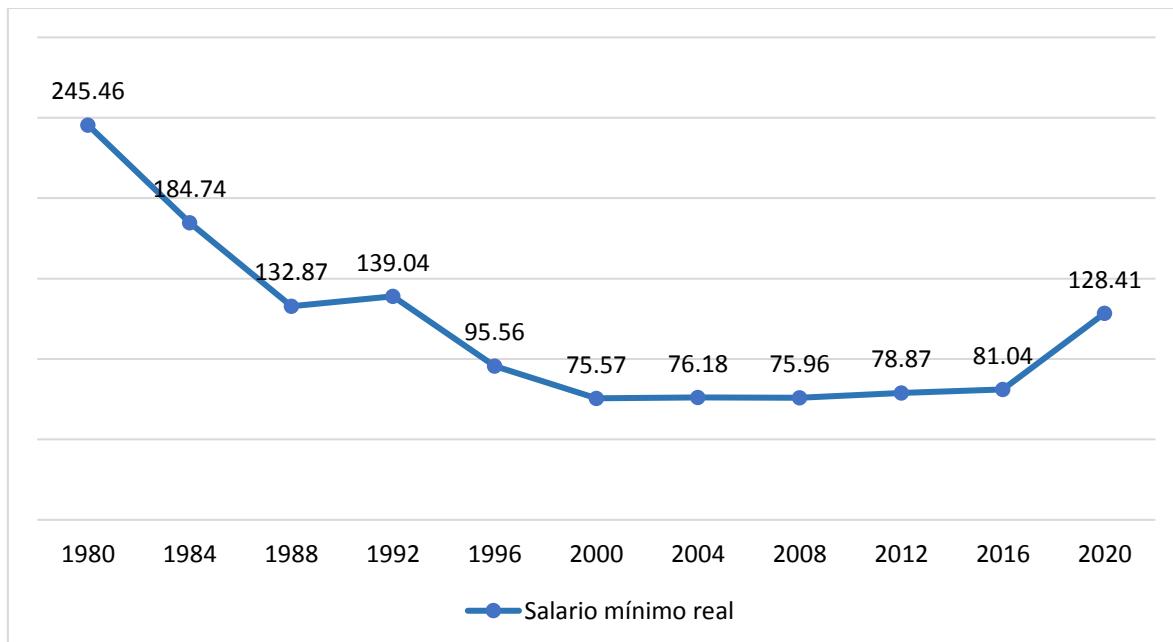
Fuente: Elaborada con datos del INEGI (2020c).

Estos datos demuestran las grandes desigualdades que padece México actualmente, en el que, a pesar de que existe un significativo crecimiento en la economía, así como un importante sector de la población que cuenta con niveles de estudios superiores, muchos se han visto en la necesidad de adentrarse a la económica informal por la falta de empleo o por los bajos salarios (Rubio Oca, 2006). Un fenómeno que ocurre en naciones como México, es la “fuga de cerebros”, es decir, que muchos individuos, con estudios superiores, emigran a otros países para buscar mejores salarios.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en México el salario mínimo debe de ser “suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2020, p. 133). La siguiente gráfica representa el salario mínimo por día y su evolución durante los últimos años:

Gráfica 5

*Evolución histórica del salario mínimo en México. 1980-2020*



Fuente: Elaborada con datos de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (2020) y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (2019).

La gráfica demuestra una disminución salarial de hasta el 69.22% en tan solo 20 años, a pesar de que ha habido un aumento significativo de aproximadamente el 63.1% del salario en los últimos 4 años. De acuerdo con Migueles (2017), el ingreso mensual que realmente necesita una familia para tener una vida digna, debería ser de 11,146 pesos mensuales, lo equivalente a casi cuatro salarios mínimos con base en la línea de bienestar mínimo. El cálculo se basa en que un salario mínimo solo alcanza para los gastos de un solo individuo. El problema es que las familias mexicanas, comúnmente, están compuestas por la madre, el padre y dos hijos. Una persona necesita tener acceso a la canasta básica alimentaria y no alimentaria cada mes para subsistir. La primera se define como un conjunto de alimentos suficientes y necesarios para satisfacer las necesidades alimentarias básicas. La segunda se relaciona con otros gastos destinados al transporte público, productos para la limpieza del hogar e higiene personal, educación, cultura, recreación, vestido, salud y servicios (Casasola, 2018).

A continuación, se presenta una tabla que representa el valor de las canastas básicas en México en las zonas rural y urbana:

Tabla 4

*Valor de la canasta básica mensual en México. 2020*

| Zona   | Tipo de canasta        | Valor de la canasta por persona | Gasto total |
|--------|------------------------|---------------------------------|-------------|
| Rural  | Canasta alimentaria    | \$1149.17                       | \$2071.90   |
|        | Canasta no alimentaria | \$922.73                        |             |
| Urbana | Canasta alimentaria    | \$1615.21                       | \$3195.43   |
|        | Canasta no alimentaria | \$1580.22                       |             |

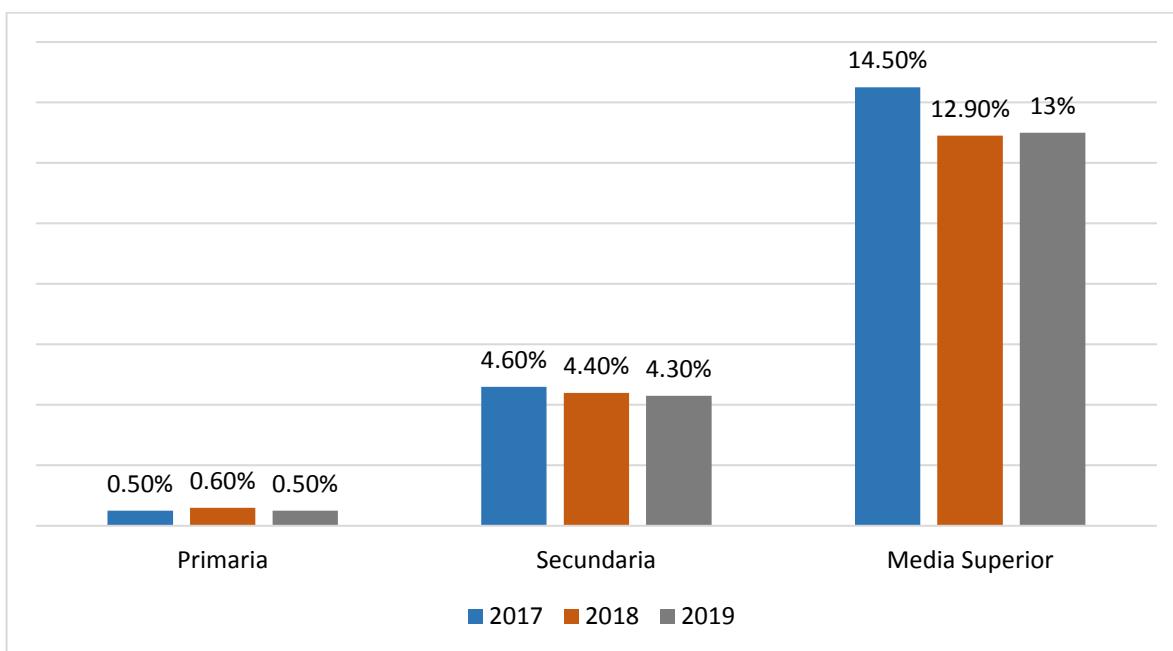
Fuente: Elaborada con datos del CONEVAL (2020).

De acuerdo con los datos expuestos, el gasto total por persona mensual, para poder adquirir la canasta básica en la zona rural, es de 2071.90 pesos y en la zona urbana es de 3195.43 pesos. El problema es que el salario mínimo está calculado para los gastos de una sola persona y no para los de toda una familia. Si se actualizan los datos utilizando el mismo cálculo empleado por Migueles (2017), el salario mínimo, en 2020, debería de ser de al menos de 12,606.92 pesos mensuales, aproximadamente, para satisfacer las necesidades básicas de una familia de al menos cuatro miembros tanto de la zona rural como urbana. Esto permite entender porqué aproximadamente el 49% de la población vive en condiciones de pobreza.

Si se analiza el impacto de las políticas neoliberales en la población infantil y juvenil, el 51.1% viven en condiciones de pobreza, los cuales no tienen acceso a los servicios básicos (Villamil, 2013). Estas circunstancias han generado un fenómeno de deserción y abandono escolar que, de acuerdo con el INEGI (2015), en 2015, 2.2 millones de adolescentes abandonaron sus estudios. La siguiente gráfica permite visualizar los porcentajes de abandono escolar en primaria, secundaria y bachillerato entre los años 2017 a 2020:

Gráfica 6

*Abandono escolar en México. 2017-2019*



Fuente: Elaborada con datos de la Secretaría de Educación Pública (2019).

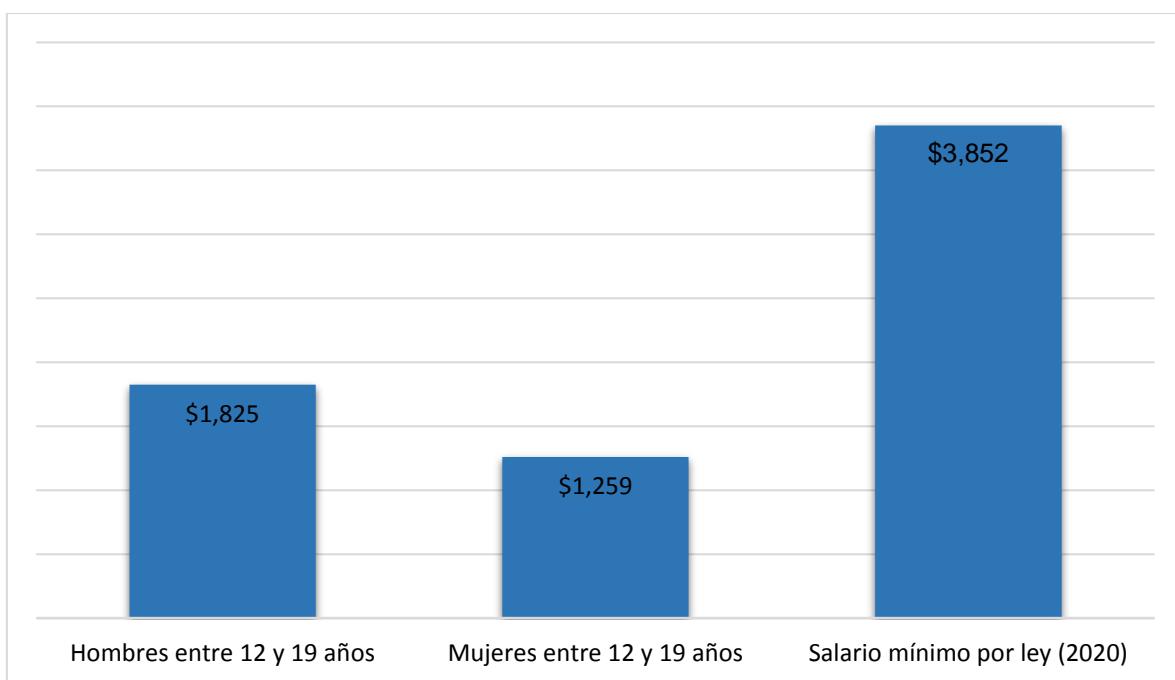
A pesar de que en México la educación es un servicio gratuito, solventado por el Estado, las familias invierten, mensualmente, para la enseñanza de un solo hijo unos 1,478 pesos, aproximadamente en pagos para cuotas, libros, uniformes, cursos y exámenes de regularización, entre otros. Además, hay que considerar que los gastos se incrementan cuando los alumnos se tienen que movilizar a otras zonas ajena a su localidad para recibir el servicio educativo. De acuerdo con la Encuesta Intercensal del INEGI (2015), el 2.7% de niños de entre 6 y 11 años, se tuvieron que trasladar a otro municipio para estudiar. Sin embargo, el 4.3% de los jóvenes de entre 12 y 14 años y respectivamente el 11.6% de los estudiantes de entre 15 y

17 años, tardaron entre una y dos horas para desplazarse a su centro educativo (Usla, 2018). Estos gastos terminan siendo superiores a lo que la gran mayoría de mexicanos pueden percibir.

Estas condiciones socioeconómicas imposibilitan que muchos estudiantes continúen sus estudios y opten por abandonar la escuela para ingresar al mercado laboral en la búsqueda de poder alcanzar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. En la siguiente gráfica se muestra el salario mensual aproximado de jóvenes entre 12 y 19 años y el salario mínimo por ley:

Gráfica 7

*Salario infantil en México. 2018-2020*



Fuente: Elaborado con datos del INEGI (2018) y de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (2020).

Esta gráfica permite entender que el ingreso al mercado laboral de niños y jóvenes desertores, no supone un cambio significativo en su desarrollo socioeconómico, ya que la gran mayoría percibe salarios muy por debajo del mínimo establecido.

Los contextos sociales antes expuestos, han incidido en que la población infantil y juvenil busque alternativas de vida a través de la explotación del trabajo infantil, la migración,

la prostitución, el robo y el ingreso al crimen organizado, problemática que se presenta en apartados posteriores.